



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-003-2021-00470-01 (O2-22-404)
Accionante: MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA
Accionada: AFP PORVENIR S.A. Y COLPENSIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: EXCEPCIÓN PREVIA – COSA JUZGADA

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-003-2021-00470-01 (O2-22-404), instaurado por MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA en contra de la AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., a fin de resolver el recurso de apelación impetrado oportunamente por la demandante, contra el auto mediante el cual se declaró probada la excepción previa de cosa juzgada, proferido el 03 de octubre de 2022 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín.

1. ANTECEDENTES

La señora MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA, actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., en procura de que se declare la ineficacia de su afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, representado por la AFP PORVENIR S.A., con la consecuente reactivación de su afiliación sin solución de continuidad al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES E.I.C.E., junto con el reconocimiento y pago por parte de aquella administradora, de la prestación pensional de vejez bajo los lineamientos del régimen de transición pensional reglado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la misma disposición legal, así como el resarcimiento por parte de la AFP PORVENIR S.A. de los perjuicios materiales ocasionados por no haberle suministrado la asesoría pertinente y en general por incumplir el

deber del buen consejo al momento de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad.

Como fundamento de sus pedimentos, indicó que nació el 09 de julio de 1954, afiliándose al sistema de seguridad social en pensiones administrado por el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES E.I.C.E, a partir del 15 de marzo de 1988, administradora donde permaneció hasta el 31 de marzo de 2000, data en la cual se trasladó de régimen a través de la AFP PORVENIR S.A.

En punto a las circunstancias que rodearon su traslado de régimen pensional, adujo que en ningún momento le fue suministrada información atinente a los requisitos exigidos para la consolidación del derecho pensional, como lo son la edad mínima, o bien, el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual; así como tampoco le fue practicado estudio previo, individual y concreto sobre las ventajas y desventajas que conllevaría trasladarse de régimen pensional.

Agregó que ante la falta de una asesoría completa por parte de la convocada AFP PORVENIR S.A., aquella la indujo en error derivado del incumplimiento del deber del buen consejo, destacando que, no se le informó que una vez efectuado el traslado de régimen pensional, perdería los beneficios del régimen de transición pensional contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con ello, la posibilidad de pensionarse de acuerdo con los parámetros y requisitos contenidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, solicitando entonces la devolución de saldos ante la administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 21 de octubre de 2021 (doc.03, carp.01), y se notificó a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, y al Procurador Judicial para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, el 28 de septiembre de 2022 (doc.21, carp.01), y a las aquí demandadas el 11 de noviembre de 2021 (doc. 05, carp.01), quienes al unísono se opusieron a la prosperidad de las pretensiones.

Es así que COLPENSIONES E.I.C.E. aceptó como ciertos las situaciones fácticas narradas en la demanda y que hacen referencia a la fecha de nacimiento y la afiliación de la promotora al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a partir del mes de marzo de 1988 y hasta el año 2000, momento en el cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad perdiendo el

régimen de transición pensional, manifestando no ser ciertos o no constarle los restantes. En su defensa propuso con el carácter de previa la excepción de cosa juzgada y como de fondo las que rotuló como falta de causa para demandar, presunción de legalidad de los actos jurídicos, falta de legitimación en la causa por pasiva, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP PORVENIR S.A. ante Colpensiones, en casos de ineficacia del traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, un juicio de proporcionalidad y ponderación, inobservancia del principio constitucional desarrollado en el artículo 48 de la constitución política, adicionado por el acto legislativo 01 de 2005, buena fe de Colpensiones, prescripción de la acción laboral, imposibilidad de condena en costas y la genérica.

A su turno, la AFP PORVENIR S.A. luego de manifestar no constarle y negar la veracidad de todos los hechos puestos en conocimiento por la aquí demandante, presentó la excepción previa de cosa juzgada e ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y como medios exceptivos de mérito los que nominó como prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 03 de octubre de 2022 (doc.33, carp.01), mediante auto emitido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en la que declaró probada la excepción previa de cosa juzgada, terminando con ello la actuación procesal puesta en su conocimiento y disponiendo el archivo de la misma.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de citar el contenido del artículo 303 del CGP, explicó que para la configuración de la figura de la cosa juzgada se requiere la verificación en las actuaciones examinadas, la identidad de partes, causa y objeto. De igual modo, en sustentación de la providencia impugnada señaló que en el proceso de la referencia y el identificado con el radicado único nacional 05001-31-05-017-2008-00956-00, se constata la concurrencia de los requisitos antes aludidos, atendiendo que en una y otra actuación judicial se encuentran vinculadas las mismas partes, resultandos idénticos los elementos que conforman el objeto y la causa de cada una de las controversias.

Es así que recordó que la promotora de la litis en la demanda que promovió en época pretérita y que fuera resuelta en primera instancia por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, solicitó la nulidad de su afiliación al régimen de

ahorro individual con solidaridad acudiendo como fundamento de tal pedimento a la falta de información o explicación por parte del asesor de la demandada AFP PORVENIR S.A. frente a las características del régimen de ahorro individual con solidaridad y a la pérdida del régimen de transición pensional, falencia que la indujo en error para celebrar el acto jurídico de traslado de régimen pensional, hechos que nuevamente invoca en la presente litis con la diferencia que en esta oportunidad solicita la ineficacia del acto de traslado en lugar de su nulidad; sin embargo, apuntó que los efectos prácticos entre la nulidad de traslado y su ineficacia como figuras del derecho privado son sinónimos, pues en ambos escenarios se aspira dejar sin efecto la vinculación al régimen de ahorro individual con solidaridad y con ello restituir al mismo el estatus jurídico que detentaba previo al perfeccionamiento o celebración del acto jurídico del traslado de régimen pensional, como lo enseña el artículo 1746 del CC (minuto 29:11 a 38:55, link audiencia, doc.33, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

El procurador judicial de la señora MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, en procura de que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se declare no probada la excepción previa de cosa juzgada, se disponga a continuar con las demás etapas que componen el proceso ordinario laboral y se resuelva de fondo el objeto de la litis.

Con tal propósito expuso las diferencias existentes entre la figura de la cosa juzgada formal y material, destacando que en el presente asunto y en la demanda que fuera instaurada en el año 2008, si bien es cierto existía identidad de partes, no ocurría lo mismo frente al objeto y la causa. Es así que puntualizó que en primera oportunidad la controversia se planteó en torno a la existencia de un vicio en el consentimiento en el acto de traslado de régimen pensional y en esta ocasión lo pretendido es la ineficacia de dicho traslado. Preciso entonces que la nulidad y la inexistencia de un acto jurídico, a pesar de encontrarse ambas contenidas en el estatuto civil, comportan situaciones y requisitos disímiles, en la medida en que en el último caso aquella se configura por incumplimiento de los requisitos legales que determina la validez del acto jurídico.

De otra parte, afirma que igual situación se predica frente a la pretensión del reconocimiento de la pensión por vejez, bajo el entendido que entre la actuación primigenia y la hoy puesta en conocimiento de la jurisdicción se evidencia una clara diferencia entre los hechos que dieron lugar a tal pedimento en uno y otro proceso judicial, particularmente en lo que respecta a la densidad de semanas cotizadas de su prohijada.

Finalmente, solicita sea valorado el carácter fundamental del derecho a la seguridad social y aún la condición de sujeto de especial protección constitucional de la señora MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA al ser una persona de la tercera edad (minuto 38:56 a 43:18, link audiencia, doc.33, carp.01).

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 31 de octubre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 08 de noviembre del mismo año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

La apoderada judicial principal de la señora MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA (doc.04, carp.02), presentó las alegaciones pertinentes reiterando las razones de hecho y de derecho esbozados con la sustentación del recurso de alzada, insistiendo en la diferencia entre el objeto y causa entre las dos actuaciones judiciales contrastadas. Por esta razón, estima como dislates del proveído venido en apelación otorgar equivalencia al contenido y alcance de la figura de nulidad y la ineficacia, cuando aquellas se cuentan con requisitos distintos y no equiparables en la teoría del negocio jurídico a pesar de encontrarse reguladas por el derecho privado; citando para el efecto el artículo 1741 del CC que reglamenta la nulidad absoluta y relativa de ciertos actos o contratos y el artículo 897 del CCo que enseña lo concerniente a los actos ineficaces de pleno derecho, en consonancia con los numerales 3 y 4 del artículo 1611 de CC.

A su turno, las accionadas AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E (docs.05 y 06, carp.02 respectivamente), de manera oportuna allegaron sus alegatos, los que dada su similitud se sintetizan en la necesidad de confirmar el proveído cuestionado por vía del recurso de apelación, atendiendo que tal y como lo resolvió el juzgador de primer grado, en las actuaciones revisadas se constata la triple identidad de partes, causa y objeto; resaltando que la modificación de la nulidad del traslado de régimen pensional a la ineficacia de dicho negocio jurídico como pretensión principal por sí sola no implica disparidad en los pedimentos, en la medida en que una y otra figura responden al mismo fin, citando la procuradora judicial de la AFP PORVENIR S.A. las sentencias SL1688, 3464 y SL 4360 de 2019, así como en la SL 2877 y SL 4811 de 2020 proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y haciendo lo propio la apoderada judicial de COLPENSIONES E.I.C.E con la sentencia SL 31989 de 2008 de la misma Corporación y la identificada con radicado No 11001-03-26-000-2008-00108-00 (36220) emitida por el Consejo de Estado.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si entre el proceso por el que se procede, y el conocido con el radicado único nacional 05001-31-05-017-2008-00956-00 existe identidad de objeto y causa petendi, y si en virtud de ello, la excepción previa de cosa juzgada está llamada a prosperar, propósito para el que habrá específicamente de establecerse si en efecto, en el *sub iudice*, las peticiones principales de nulidad e ineficacia del acto de traslado de régimen pensional de MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA en una y otra actuación, comparten la misma cuestión litigiosa soportada en un mismo hecho jurídico o material.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la decisión impugnada, atendiendo a que la jurisprudencia laboral del máximo órgano de cierre de esta jurisdicción últimamente ha delineado que para que se determine la cosa juzgada, respecto a la identidad de *causa petendi*, no resulta indispensable que el libelo genitor primigenio y el que posteriormente se ponga en conocimiento de la jurisdicción sean exactamente iguales, idéntico o fidedignos; lo que se reclama es que en ambas actuaciones se muestre evidente que se pretende revivir una misma cuestión litigiosa ya resulta por la jurisdicción laboral. De ahí que, la pretensión concerniente a la nulidad de un acto jurídico derivado de la configuración de un vicio en el consentimiento de uno de los contratantes, guarda identidad en su núcleo esencial, con la solicitud de ineficacia del negocio jurídico, al reprochar en ambos casos la ausencia el incumplimiento del deber de información de la demandada como administradora del RAIS.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio

clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que la señora MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA nació el 09 de julio de 1954 (págs.28 a 30, doc.01, carp.01; pág. 70, doc.09, carp.01), que se afilió para los riesgos de IVM al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a partir del año 1988, entidad donde permaneció vinculada hasta marzo del año 2000, cuando se trasladó a la AFP PORVENIR S.A. (págs.31 a 41, doc.01, carp.01; págs.41 a 67, doc.09, carp.01; docs.15 y 16, carp.01). Adicionalmente, se encuentra acreditado que, con antelación al presente trámite, la señora MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA instauró demanda ordinaria laboral contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES E.I.C.E., y la AFP PORVENIR S.A., conocida con el radicado único nacional 05001-31-05-017-2008-00956-00, aspirando a la nulidad del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, alegando el error como vicio del consentimiento; solicitando como consecuencia su retorno al primero de aquellos regímenes pensionales, no sin antes reclamar del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el reconocimiento de la pensión por vejez (págs.85 a 92, doc.09, carp.01; págs.7 a 14, doc.05, carp.02).

Las anteriores súplicas fueron resueltas en primera instancia por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín en sentencia del 22 de noviembre de 2010 (págs.23 a 43 y 214 a 233, doc.10, carp.01 y págs.17 a 37, doc.05, carp.02); autoridad judicial que resolvió entre otros apartes, “*declárase de oficio probada la excepción de petición antes de tiempo*” en lo que respecta al derecho pensional, mientras que en lo que comportaba a la nulidad del traslado solicitado, hizo propios en la parte motiva de su decisión los argumentos expuestos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en

sentencia del 9 de septiembre de 2008, radicación 31989, para así determinar la nulidad de traslado de régimen pensional deprecada y con ello ordenar a la sociedad AFP PORVENIR S.A. la restitución al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, como la administradora del régimen de prima media para la época, de *“los saldos de la cuenta de ahorro individual de la actora, junto con los rendimientos financieros, para que éste tenga en cuenta dicho tiempo como semanas cotizadas para conceder la pensión de vejez pretendida”*.

La sentencia antes individualizada fue conocida en grado jurisdiccional de consulta por parte de la Sala Quinta de Descongestión Laboral de esta Corporación, quien en providencia del 30 de septiembre de 2011 (págs.44 a 51 y 235 a 242, doc.10, carp.01 y págs.39 a 46, doc.05, carp.02), dispuso revocar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el 22 de noviembre de 2010, para en su lugar, absolver a las demandadas de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra.

Como argumento basilar de tal determinación el otrora juez plural consideró que la promotora de la litis no probó, de acuerdo con lo señalado en el artículo 177 del CPC -vigente para la época- el engaño que sostuvo sufrió por parte del asesor de la AFP PORVENIR S.A., sino que por el contrario, de acuerdo con la prueba testimonial practicada, los motivos que direccionaron su vinculación al régimen de ahorro individual con solidaridad respondieron a la presión ejercida por su empleador. Debe resaltar la Sala que, según informa la prueba documental allegada al plenario (págs.5 a 21, 93 a 113, 130 a 150, y 243 a 282, doc.10, carp.01 y págs.51 a 66, doc.05, carp.02), la demandante presentó recurso extraordinario de casación y una acción de tutela, los cuales fueron resueltos de manera adversa a sus intereses y aspiraciones.

2.3.1. Las excepciones previas: Las excepciones constituyen una herramienta que otorga el ordenamiento jurídico para que el demandado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa, ya sea atacando las pretensiones del demandante, enderezando el litigio para evitar posibles nulidades o terminando el proceso al considerar que este no cuenta con todos presupuestos que exige la ley para que pueda ser priorizarse. En defensa suya, el demandado puede formular tres tipos de excepciones, a saber, i) excepciones previas, ii) excepciones de mérito o de fondo y iii) excepciones mixtas.

Las excepciones previas, también conocidas como dilatorias, son aquellas destinadas a sanear el proceso, y por ello, su cometido no es el de cuestionar el fondo del asunto, sino el de mejorar el trámite de la Litis, y así, evitar posibles nulidades, o terminar el proceso cuando no es posible sanearlo, de forma tal que, el legislador previó que debían ser resueltas en la audiencia de

conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio (artículo 32 del CPTSS).

Con relación a la excepción de cosa juzgada, expresamente se estableció que “[e]l juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada...” (artículo 32 del CPTSS – Subraya intencional de la Sala).

2.3.2. La excepción de cosa juzgada: La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Esta figura jurídica tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto y, como positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico (CSJ SL5121-2018, SL1364-2019, SL3649-2021, AL1359-2022). Es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia, y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes, y definitivas, efectos que se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias, y alcanzar un estado de seguridad jurídica (C-774 de 2001 y C-100 de 2019).

De ahí que, se exhiba como diáfana conclusión, la material y efectiva imposibilidad de las partes y de la comunidad en general, de instaurar nuevamente ante los estrados judiciales el mismo litigio para así salvaguardar y garantizar el principio de la seguridad jurídica que caracteriza la función judicial, imponiéndole la ley el deber al juez al momento que tenga conocimiento de la ocurrencia de esta figura y verificado los requisitos exigidos para tales efectos, de declarar su configuración sin dilación y aun de forma oficiosa.

En esta dirección, según lo dispuesto en el artículo 303 del CGP, la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes, ello así, para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

- a) Identidad de partes, lo que implica que al nuevo proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión de la que se predica

la cosa juzgada, criterio que no debe confundirse con la “identidad de personas”, pues si bien es cierto que el requisito se configura cuando los integrantes de las partes en el nuevo proceso son las mismas personas que intervinieron en el anterior, puede suceder que haya cambio físico de personas, mas no alteración de las partes, como sucede cuando en el nuevo proceso intervienen los sucesores mortis causa.

- b) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial respecto de la cual se predica la cosa juzgada; se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado; igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos derivados de un derecho que no fueron declarados expresamente.
- c) Identidad de causa petendi, se presenta cuando entre la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada existen los mismos fundamentos de hecho como sustento, referidos al supuesto fáctico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado.

Para la Sala, la configuración de la figura de cosa juzgada no exige que las actuaciones cotejadas correspondan a un reflejo exacto o idéntico, pues lo que está llamado a verificarse, es que en efecto se plantee el mismo litigio que fuera desatado por la jurisdicción. Así, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en decisión SL818 de 2021 determinó que *“conviene aclarar que para que en un caso determinado se configuren los elementos axiológicos del instituto procesal de la “cosa juzgada” no es indispensable que todos los hechos de las demandas materia de cotejo sean exactamente los mismos, ni que el conjunto del petitum sea idéntico. La ley procesal no exige para la prosperidad de esta excepción que el segundo proceso sea un calco o copia fidedigna del precedente en los aspectos citados. No. Lo fundamental es que el núcleo de la causa petendi, del objeto y de las pretensiones de ambos procesos evidencien tal identidad esencial que permita inferir al fallador que la segunda acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, y por ende a revivir un proceso legal y definitivamente fenecido.*

Si se llegase a la afirmación contraria bastaría que después de una sentencia judicial desfavorable la parte perdedora alterase los fundamentos fácticos de la acción desventurada o adicionara pretensiones accesorias con el objeto de enervar los inexorables e indelebles efectos de la cosa juzgada, en una tentativa vana de enmendar los errores que originaron el resultado frustrado. Tal actitud fomentaría el desgaste del sistema judicial y socavaría su seriedad, respetabilidad y prestigio. De ahí porqué resulta muy importante que quien instaure una acción tenga desde un comienzo especial cuidado de señalar de manera concreta,

sintética, completa y leal todos los argumentos de facto que le asisten a su favor, con la conciencia de que el proceso que ventila es en principio único y definitivo, y solo tiene las etapas que la ley garantiza dentro del debido proceso por ella gobernado”.

En ese sentido, la Sala advierte que entre el *sub lite*, conocido con el radicado único nacional 05001-31-05-003-2021-00470-00, y la anterior litis, conocida con el radicado único nacional 05001-31-05-017-2008-00956-00, se verifica el cumplimiento de los requisitos anteriormente predicados, en particular, la identidad de objeto y de causa petendi.

Así, sea lo primero indicar que como bien lo concluyó el *a quo*, no suscita mayor controversia la comprobada identidad de las partes integrantes de la litis en una y otra actuación procesal, que dicho sea de paso, corresponde a la señora MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA como extremo demandante y la AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E. como convocadas a juicio, siendo esta última entidad la actual administradora del régimen de prima media con prestación definida, asumiendo con ello las funciones y obligaciones atribuidas al extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Ahora, frente a los elementos restantes la conclusión es la misma y así refulge de la lectura de los hechos y peticiones en una y otra acción judicial. Es así que en la demanda primigenia, la parte demandante solicitó de manera unívoca “[q]ue se declare la nulidad de la vinculación al Fondo de Pensiones Porvenir S.A., de mi mandante, toda vez que en la misma medió vicio del consentimiento, al no habersele puesto de manifiesto a mi representada, por parte del Fondo, sobre las reales consecuencias que acarrearía el traslado de régimen pensional”, atribuyendo entonces como conducta reprochable del fondo accionado AFP PORVENIR S.A. la omisión de suministrar la información sobre el régimen pensional al que iba a trasladarse, solicitando con ello de manera explícita se diera aplicación a lo normado en el artículo 1511 del CCC, atinente al error de hecho sobre la calidad del objeto, ubicando la situación de la demandante, en lo que denominó el error subjetivo como vicio del consentimiento.

A su turno, en el acápite de narración de las situaciones fácticas e individualización de las súplicas en el *sub examine*, a las claras se muestra que en esta ocasión la parte demandante abandona la tesis de la configuración del error como vicio del consentimiento como sustento material para excluir de todo efecto jurídico su traslado al régimen de ahorro individual, para en su lugar, cuestionar el cumplimiento del deber de información como característica indispensable en la decisión de afiliarse a uno cualquiera de los regímenes pensionales creados con la promulgación de la Ley 100 de 1993, lo que resulta más determinante al acudir como fundamento legal al contenido de los artículos 13 y 297 de esta misma normatividad, así

también a las obligaciones relacionadas con el deber de información que impone las sociedades administradoras de fondos de pensiones el Decreto 663 de 1993, Ley 1328 de 2009 y Ley 795 de 2003, y a la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Frente a los efectos de una y otra figura, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia SL4360 de 2019 explicó:

“Cuando se alude a la ineficacia en sentido amplio, se hace referencia a todos los defectos o anomalías, de cualquier clase, que impiden que el acto jurídico produzca sus efectos o deje de producirlos. Cubre todas las causas que perturban su eficacia y comprende diversas reacciones del ordenamiento jurídico tales como la inexistencia, la nulidad absoluta, la nulidad relativa o la ineficacia en sentido estricto, que con mayor o menor intensidad golpean el acto o negocio jurídico.

Un acto jurídico es inexistente cuando se ha celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación (ad substantiam actus) o cuando falta alguno de sus elementos esenciales. El acto así formado carece de existencia ante el derecho o, dicho de otro modo, no tiene vida jurídica y, por tanto, no produce ningún efecto.

En cualquiera de sus modalidades (absoluta y relativa), la nulidad es una sanción que impide que el acto jurídico produzca efectos desde el momento de su formación, por faltarle alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes (artículo 1740 del Código Civil). En este evento, el acto existe, pero está viciado por falta de alguno o algunos de los elementos de validez.

Finalmente, la ineficacia en sentido estricto supone un acto jurídico existente y válido, pero que no produce sus efectos finales o queda privado de ellos por expresa disposición del legislador. La Sala Civil de esta Corporación ha sostenido que «la ineficacia en sentido propio o restringido, consiste en la alteración de los resultados finales de la figura [...] sin afectar su validez”.

Aclarado lo anterior, y aun a pesar de los esfuerzos argumentativos de la parte demandante para distinguir uno y otro proceso judicial, para la Sala, diáfano se muestra que, en una y otra actuación aflora la misma cuestión litigiosa, cual es, dejar sin efecto el traslado de régimen pensional de la demandante ante la ausencia del deber de información por parte del fondo representante del RAIS (vuelta al *statu quo ante*), lo que de suyo demanda de la jurisdicción,

reexaminar si las deficiencias en la información suministrada a la accionante frente a las características intrínsecas del RAIS y las consecuencias del traslado de régimen pensional, abren paso a declarar, desde la óptica de su finalidad, determinaron que este no surtiera efectos, para con ello volver al estado jurídico anterior a su celebración, la ausencia del consentimiento informado que precisamente constituía el objeto del litigio y a partir del cual resultaba adecuado efectuar el análisis fáctico y jurídico propuesto para resolver la controversia, como así ocurrió en el proceso 05001-31-05-017-2008-00956-00; lo que termina por derruir el fundamento principal del dislate atribuido por el censor a la providencia confutada.

Como corolario de lo expuesto, por encontrarse acreditados la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 303 del CGP para la configuración de la institución jurídico procesal de la cosa juzgada respecto de los hechos y pretensiones entre la presente actuación y la surtida bajo el radicado único nacional 05001-31-05-017-2008-00956-00, no asoma alternativa distinta para la Sala que confirmar el auto de primer grado censurado.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, las costas de la segunda instancia estarán a cargo de MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA, por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y con arreglo a lo previsto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho, a favor de las demandadas AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E, la suma de \$1.160.000, que corresponde a un (1) SMLMV, en proporción de la mitad de ese valor para cada una de las accionadas.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 03 de octubre de 2022, mediante la cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín declaró probada la excepción previa de cosa juzgada que fuera propuesta por las demandadas AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.


SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de MARÍA CONSUELO CASTRO MOLINA, fijándose como agencias en derecho, a favor de las demandadas AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E, la suma de \$1.160.000, correspondiente a un (1) SMMLV, que deberá cumplir en proporción a la mitad de ese valor para cada una de las accionadas.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, según lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



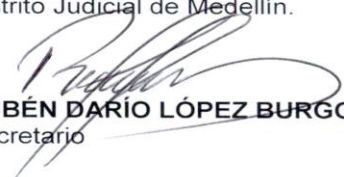
CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario